







Nº de expediente:	<b>001-00080055</b>
Solicitante:	
NIF:	
E-mail:	
Datos solicitados:	<b>Informes y recursos misión EPA en Ucrania</b>

En relación a la petición de información del  sobre informes técnicos, documentales y presupuestarios de la operación del EPA en Ucrania para la investigación de crímenes de guerra, así como relación de todos los recursos humanos y materiales dedicados a la misma, solicitud que formula al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, se significa lo siguiente:

Atendiendo al compromiso asumido por España para dar respuesta a la petición de la Fiscalía General de Ucrania, de apoyo en labores de investigación sobre la posible comisión de crímenes de guerra en territorio ucraniano, en el marco del conflicto bélico que mantiene este país con Rusia, el Ministerio del Interior acordó la activación del Equipo Policial de Apoyo (EPA).

Así el pasado 1 de diciembre de 2.022, 11 agentes, especialistas en policía científica, criminalística y desactivación de explosivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, se desplazaron a Kiev con la misión de trabajar conjuntamente con los Fiscales ucranianos para la recogida de vestigios y pruebas para la investigación de la posible comisión de crímenes de guerra por parte de Rusia. Así los informes técnicos emitidos por el EPA han sido puestos a disposición del Departamento de Lucha contra los delitos cometidos en condiciones de conflicto armado de la Oficina del Procurador General de Ucrania, siendo incorporados a los procesos judiciales abiertos en aquel país.

Teniendo en cuenta lo anterior, el conocimiento público de los informes técnicos o documentales de la misión del EPA en Ucrania daría acceso a información de la investigación preliminar, comprometiendo gravemente la efectividad e idoneidad de las actuaciones llevadas a cabo por el EPA para la investigación de crímenes de guerra, la sanción de los posibles ilícitos penales, así como la seguridad nacional de Ucrania, por lo que procede denegar la información solicitada conforme al artículo 14.1.c) y e) de la Ley 19/2003, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en cuanto su acceso supondría un perjuicio para las relaciones exteriores, y la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales.

Por lo que respecta a los informes presupuestarios, el coste de la materialización del despliegue del contingente español, ha ido a cargo de los créditos de los Presupuestos Generales del Estado asignados al Ministerio del Interior, programa 132ª, correspondiente a Seguridad Ciudadana, cuyo contenido se fundamenta en la realización de las funciones encaminadas a proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana, en cumplimiento de la misión que el artículo 104 de la Constitución encomienda a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FFCCSE).

En este sentido, el artículo 11.g) de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, se define como función de las FFCCSE el "*Investigar los delitos para*



*descubrir y detener a los presuntos culpables, asegurar los instrumentos, efectos y pruebas del delito, poniéndolos a disposición del Juez o Tribunal competente y elaborar los informes técnicos y periciales procedentes*”, por lo que, el coste de este dispositivo quedaría incluido en dicho programa, sin que los desarrollos de estos cometidos supongan un gasto adicional ni quepa su disociación presupuestaria entre los distintos cometidos, por lo que, cualquier información en este sentido requeriría una previa reelaboración, supuesto recogido como causa de inadmisión, según el artículo 18.1.c). de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

En cuento a la relación de recursos humanos que fueron desplegados en Ucrania para esta misión concreta, además de los 11 integrantes del EPA, se desplazaron hasta Ucrania un Equipo del Grupo de Acción Rápida (GAR) de la Guardia Civil compuesto por 9 agentes, encargados de prestar seguridad al contingente español.

Por último, y en lo concerniente a los recursos materiales utilizados en esta misión, el Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de noviembre de 1986, por el que se clasifican determinados asuntos y materias con arreglo a la Ley de Secretos Oficiales, otorga la clasificación genérica de Reservado a la información relativa a “las plantillas de personas **y de medios y de equipo de las Unidades**”. Este Ministerio considera que conocer los recursos materiales empleados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en su labor de apoyo a la Fiscalía General de Ucrania en la investigación de los crímenes de guerra pudiera dar lugar a riesgos o perjuicios graves para la seguridad nacional, la defensa y la seguridad pública en el supuesto de ser divulgadas, por lo que se concluye que procede denegar la información solicitada conforme a lo establecido en el artículo 14.1.a), b) y d) de la citada Ley 19/2003.

Contra la presente Resolución, podrá interponerse con carácter potestativo reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el plazo de un mes, desde el día siguiente al de la fecha de notificación de la misma, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 23 y 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno en concordancia con lo establecido en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Una vez resuelta dicha reclamación, o de no hacer uso de la misma, podrá interponer ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, desde el día siguiente a aquel en que se notifique la resolución expresa de la reclamación o en que ésta deba entenderse presuntamente desestimada, y en caso de no hacer uso de la misma, desde el día siguiente al de la notificación de esta resolución, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 20.5 de la Ley 19/2013 y 25, 26, 45 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

EL DIRECTOR GENERAL,

José Antonio Rodríguez González